



U.S. DEPARTMENT *of* STATE

Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos – 2007

Argentina

Publicado por Dirección de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
11 marzo de 2008

La Argentina es una república constitucional y federal, con una población de aproximadamente 40.300.000 habitantes. El 28 de octubre, el país tuvo elecciones legislativas y nacionales y los ciudadanos eligieron presidente a Cristina Fernández de Kirchner en una elección multipartidaria, libre e imparcial en términos generales. Las autoridades civiles mantuvieron el control efectivo de las fuerzas de seguridad.

Si bien el gobierno generalmente respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, se registraron los siguientes problemas relacionados con los derechos humanos: casos de muertes a manos de la policía o fuerzas de seguridad y uso de la fuerza en forma infundada o excesiva, condiciones deficientes de cárceles y prisiones violentas con sobrepoblación y riesgo para la vida, arrestos y detenciones arbitrarias ocasionales, prolongadas detenciones previas al inicio de los juicios, independencia judicial permanentemente débil; corrupción oficial, violencia doméstica y acoso sexual contra las mujeres, trata de personas para explotación sexual y laboral principalmente dentro del país y trabajo infantil.

Durante el año, el gobierno condenó a diversos responsables de abusos de derechos humanos cometidos durante la época de la Guerra Sucia de 1975-83 y reanudó los juicios que habían sido suspendidos en 1989 y 1990 cuando el gobierno indultó a los responsables de dichos abusos.

RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto por la integridad de la persona; incluye estar libre de:

- a. Privación arbitraria o ilegítima de la vida

Si bien el gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato motivado por razones políticas, oficiales policiales perpetraron homicidios mediante el uso

excesivo o injustificado de la fuerza. Las autoridades investigaron y en algunos casos, detuvieron, enjuiciaron y condenaron a los oficiales involucrados.

En abril, oficiales de la policía de Neuquén utilizaron la fuerza para reprimir una huelga de docentes que tuvo como resultado la muerte del docente Carlos Fuentealba. Un oficial de la policía implicado en la muerte fue detenido rápidamente y dado de baja de la fuerza y al término del año permanecía detenido a la espera del juicio.

En noviembre, Carlos Madrid, un sargento de la policía de Buenos Aires fuera de servicio, disparó y mató al joven de dieciocho años Daniel Ezequiel Céspedes cuando el policía intervino en una gresca entre su hijo y la víctima. El sargento se entregó de inmediato. Madrid fue procesado por cargos de homicidio y al término del año permanecía detenido a la espera del juicio.

En abril, fue asesinado un testigo clave que había brindado testimonio en el juicio llevado a cabo en 2006 contra cinco oficiales de la policía acusados de torturar y matar a Andrea Viera en una comisaría de la policía bonaerense en 2002. La investigación se centró en los oficiales de la policía pero al finalizar el año, no se habían identificado sospechosos. Otros testigos en el juicio que sentenció a un oficial a cadena perpetua y absolvió a los otros, recibieron presuntamente amenazas de muerte.

El juicio de dos ex oficiales de policía y un civil acusados de matar en mayo de 2006 a golpes y por disparos al joven de quince años Miguel Eduardo Cardozo aún estaba pendiente al cabo del año.

En junio, comenzaron los juicios en la provincia de Jujuy de tres oficiales y un agente de policía implicados en la muerte de Saúl Mendoza, un joven de 17 años que fue encontrado ahorcado con presuntos signos de tortura en un baño de una comisaría.

b. Desapariciones

No hubo informes sobre desapariciones por razones políticas.

Continuaron los procesos judiciales relacionados con los homicidios, desapariciones y torturas cometidos por el régimen militar de 1976-83. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), durante el año, se llevaron a cabo aproximadamente 130 investigaciones judiciales que involucraron a 873 personas por estos delitos. Se estima que han sido procesadas 280 personas, de las cuales 210 permanecían detenidas a la espera del juicio por delitos cometidos durante esta época.

En marzo, comenzó un juicio en Mar del Plata contra la concentración Universitaria Nacional, una organización disuelta por ley en 1978 que entregó a jóvenes disidentes al grupo extremista armado conocido como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

El 13 de julio, la Corte Suprema revocó un indulto presidencial de 1989 otorgado por el entonces Presidente Carlos Menem al General Santiago Riveros, ex funcionario militar acusado de crímenes de lesa humanidad como funcionario máximo de centros de detención durante la dictadura militar de 1976-83. La decisión dio lugar al procesamiento de cientos de funcionarios que habían sido específicamente indultados por Menem por abusos contra los derechos humanos durante la Guerra Sucia.

El 9 de octubre, Christian Von Wernich, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana y ex capellán de la Policía Bonaerense durante la Guerra Sucia fue sentenciado a cadena perpetua por su participación en varios casos de asesinato, tortura y detención ilegal. Von Wernich fue la primera figura eclesiástica en ser juzgado y condenado por abusos de los derechos humanos relacionados con la Guerra Sucia desde la decisión de la Corte Suprema en 2005 de anular las leyes de amnistía que otorgaban inmunidad a ex personal militar.

El 18 de octubre se inició el juicio contra el ex oficial naval Héctor Febres acusado de torturar a cuatro personas en la Escuela de Mecánica de la Armada, un centro clandestino de detención durante la dictadura militar de 1973-83. Febres murió en su celda el 10 de diciembre, cuatro días antes de que el tribunal anunciara su sentencia. Dos prefectos, además de la esposa y los dos hijos de Febres permanecían detenidos al término del año. La Presidenta desplazó al Jefe de la Prefectura Carlos Fernández el 17 de diciembre; en parte debido a la falta de control sobre las condiciones de detención de Febres y a la incapacidad de asegurar su integridad mientras se encontraba detenida.

En octubre, el gobierno abrió una investigación judicial contra Ernesto Barreiro por su participación en casos de abuso de los derechos humanos durante la dictadura militar mientras se desempeñaba como oficial del ejército e interrogador principal en el centro clandestino de tortura La Perla. A fin de año, Barreiro permanecía detenido a la espera del juicio.

En diciembre, un juez condenó a siete oficiales del ejército de alto rango y a un ex oficial de la policía a períodos de 20 a 25 años de cárcel por diversos cargos relacionados con el secuestro, tortura y desaparición de seis personas durante el régimen militar. El fallo marcó la primera vez que un grupo de ex oficiales de rango fue condenado desde que la Corte Suprema revocara las leyes de amnistía de la década del ochenta en 2005. Asimismo, en diciembre, el fallo de un tribunal federal determinó que un ataque perpetrado por la guerrilla en 1976 contra la cafetería del Departamento de Policía Central, en el que murieron 24

personas, no constituía un delito contra la humanidad y en consecuencia rigió la prescripción.

No se produjeron novedades en el caso del desaparecido Julio López (2006), una víctima de tortura durante la Guerra Sucia de 77 años de edad y testigo clave en la causa contra Miguel Etchecolatz, ex comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. López continuaba desaparecido al finalizar el año a pesar de las búsquedas efectuadas por el gobierno y la recompensa ofrecida de 315.000 dólares estadounidenses (un millón de pesos) por información que sirviera para ubicar su paradero.

La investigación por el secuestro en 2006 de Luís Gerez proseguía al cabo del año. Gerez estuvo desaparecido durante dos días y presuntamente fue víctima de tortura y trauma psicológico. Gerez había dado testimonio contra Luis Patti, político y ex jefe de la policía acusado por abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar de 1976-83. En noviembre, se dictó la prisión preventiva contra Patti, acusado de delitos de lesa humanidad por el secuestro y tortura de tres personas en 1976 y 1977.

La Secretaría de Derechos Humanos mantiene los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La Secretaría ha recibido desde julio 32.404 pedidos de compensación financiera desde que comenzó a aceptar los reclamos en 1991 de las familias de personas muertas o desaparecidas durante la dictadura militar. La Secretaría ha adjudicado 250 indemnizaciones a durante el año.

Las autoridades judiciales continuaron la investigación de casos de secuestros y adopción ilegal de bebés, hijos de disidentes detenidas, por parte de miembros de la ex dictadura militar. A fin de año, se habían identificado ochenta y ocho casos de hijos de disidentes detenidas y de desaparecidos que fueron adoptados ilegalmente y a quienes se notificó sobre su verdadera proveniencia.

c. Tortura y otras formas de tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.

A pesar de que la ley prohíbe tales prácticas y establece penas para la tortura similares a las que corresponden por homicidio, algunos policías y agentes penitenciarios continuaron empleando tortura y brutalidad. El CELS denunció brutalidad policial y tortura ocasional de sospechosos. Si bien el gobierno investigó denuncias sobre brutalidad policial en las cárceles, hubo pocas condenas.

En Misiones, dos oficiales de la policía fueron desplazados de sus cargos en enero bajo sospecha de encubrir el abuso sexual de la joven de 15 años Rosa

Camila Gauna, quien fuera detenida presuntamente sin causa en diciembre de 2006 y muriera en enero a raíz de un incendio iniciado en la dependencia para mujeres de la policía donde permanecía alojada. Al término del año, continuaba la investigación por su muerte; inclusive se investigaba si el fuego podría haber sido provocado para cubrir el abuso sexual y físico.

Los dos oficiales de bajo rango de la Marina y un civil permanecían bajo prisión preventiva acusados del secuestro, ejercer violencia física, tortura y asesinato del adolescente de 15 años Lucas Ivarrola ocurrido el 26 de junio. El adolescente había sido acusado de robar una televisión. Al término del año aún no se había fijado fecha para el juicio.

No se produjeron novedades en la causa por presunta obstrucción por parte del director médico forense de la investigación por torturas con descargas eléctricas del detenido Julio Ortiz en la Penitenciaría de la Plata en 2005.

- Condiciones carcelarias y de los centros de detención

Las condiciones carcelarias a menudo fueron deficientes y atentaron contra la vida. En muchas cárceles, los reclusos sufrieron hacinamiento extremo, malnutrición, tratamiento médico y psicológico inadecuado, condiciones sanitarias inadecuadas, visitas familiares restringidas y frecuentemente, tratamiento inhumano y degradante, de acuerdo con varios informes de organizaciones de derechos humanos y centros de investigación.

El centro de investigación “Unidos por la Justicia” estimó una superpoblación carcelaria de 30-40 por ciento en todo el país; si bien destacó que la construcción de nuevos establecimientos en las provincias de Buenos Aires y Mendoza han aumentado la capacidad. El Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires informó que en dicha provincia, que alberga aproximadamente la mitad de la población carcelaria total de todo el país, dicha población había disminuido de 30.000 reclusos en 2005 a 25.000 en 2007. El gobierno informó que el número de detenidos en establecimientos de la policía de la provincia de Buenos Aires disminuyó significativamente de 7.507 en 2002 a 2.982 en 2007.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó 265 casos de muertes violentas ocurridas en establecimientos de todo el país en los últimos dos años. El informe concluyó que la violencia fue consecuencia de las condiciones de hacinamiento en las cárceles.

El Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires destacó que se registraron 6.000 incidentes de violencia en las cárceles de la provincia de Buenos Aires durante los doce

meses anteriores a junio; 96 de los cuales tuvieron como resultado uno o más casos de muerte o personas gravemente heridas. Según el informe del Comité se registraron 66 muertes en cárceles de la provincia de Buenos Aires desde junio de 2006 a junio de 2007. El comité atribuyó la violencia a la violencia entre los presos como así también de los reclusos contra los guardiacárceles.

Si bien las mujeres detenidas permanecieron separadas de los hombres, los grupos de derechos humanos informaron que algunas mujeres fueron detenidas en comisarías y que aproximadamente 84 niños menores de 4 años vivían en cárceles de la provincia de Buenos Aires; 75 de estos niños estaban en la cárcel de Los Hornos. En general, las cárceles de hombres fueron más violentas, peligrosas y superpobladas que las de mujeres.

La superpoblación en los establecimientos juveniles obligó en muchos casos a que los menores permanecieran detenidos en comisarías, aunque separados de los adultos. Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, estas dependencias albergaron aproximadamente 20.000 menores. La abrumadora mayoría no había cometido delitos; más bien, habían sido abandonados por sus familias o considerados “de riesgo” por otros motivos. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) accedió al pedido de revisión de la situación de menores detenidos realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la provincia de Santa Fe.

Los detenidos a la espera de un juicio generalmente fueron alojados con los condenados. CELS estimó que 5.147 presos en cárceles federales o el 57 por ciento de la población de cárceles federales se encontraban a la espera de un juicio. Las estadísticas provisionales del CELS para la provincia de Buenos Aires indicaron que casi el 80 por ciento de los detenidos estaban a la espera de un juicio. Si bien el plazo para la prescripción de la prisión preventiva es de dos años, éste puede prolongarse. El CELS informó que los detenidos esperaron un promedio de tres años para ser sometidos a juicio y que algunos casos llegaron a seis años de espera. Según el CELS, 30 por ciento de los detenidos a la espera de un juicio fueron finalmente absueltos.

En febrero, la provincia de Buenos Aires creó el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para desarrollar e implementar políticas de prevención del delito de menores, proteger los derechos de los delincuentes juveniles y rehabilitar menores a efectos de su reinserción en la sociedad.

Quince guardiacárceles y agentes penitenciarios permanecían con prisión preventiva en la cárcel de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, a la espera de la resolución de la investigación por el incendio ocurrido en 2005 en el que murieron 33 reclusos.

En febrero, la Corte Suprema dio instrucciones al gobierno nacional y al de la provincia de Mendoza de informar sobre medidas concretas destinadas a mejorar las condiciones carcelarias en cumplimiento de diversos fallos del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. En septiembre, el gobierno de Mendoza informó que proseguía con la construcción de nuevas cárceles, que habían contratado más personal penitenciario y aumentado el gasto per cápita de los reclusos.

El gobierno autorizó visitas de observadores locales e internacionales de derechos humanos que se realizaron durante el año.

d. Detención o Encarcelamiento Arbitrario

La ley prohíbe la detención y el encarcelamiento arbitrario. En términos generales, el gobierno respetó estas prohibiciones; no obstante, ocasionalmente policía presuntamente detuvo y encarceló a ciudadanos en forma arbitraria.

- Papel de la Policía y del Aparato de Seguridad

La Policía Federal Argentina está facultada para mantener la ley y el orden en la Capital Federal y posee competencia en materia de delitos federales en las provincias. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, la Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal se encuentran entre otras instituciones con autoridad federal de policía. Adicionalmente, cada provincia tiene su propia fuerza policial que responde a un ministerio o secretaría provincial de seguridad. La efectividad y respeto por los derechos humanos de dichas fuerzas, consideradas en forma individual, revelaron notables variaciones. La corrupción fue generalizada en algunas fuerzas y los controles internos para contrarrestar los abusos policiales fueron débiles.

Los abusos más habituales fueron la extorsión y protección de quienes están involucrados en el juego ilegal, la prostitución y el circuito del robo de vehículos, como así también la detención y extorsión de individuos bajo amenaza de “plantarles” pruebas para acusarlos de delitos. Algunos policías también estuvieron involucrados en el tráfico de drogas.

Las fuerzas federales de seguridad están facultadas para realizar investigaciones internas de los supuestos abusos y desplazar personas que presuntamente hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Asimismo, el gobierno federal puede demandar o querellar ante los tribunales federales; los gobiernos provinciales poseen facultades para hacer lo mismo con las fuerzas de seguridad provinciales. Los miembros de las fuerzas de seguridad condenados por un delito reciben penas severas.

Los esfuerzos por eliminar de la policía la corrupción y otros delitos prosiguieron en la Provincia de Buenos Aires, Tucumán Río Negro, Santa Fe y Córdoba. Por ejemplo, en agosto, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dio de baja a 105 policías corruptos en un esfuerzo por reformar la fuerza policial de la provincia. Adicionalmente, las provincias mencionadas ofrecieron mejoras en la capacitación policial a fin de profesionalizar sus fuerzas.

- Arresto y Detención

La policía puede detener a sospechosos hasta un término de 10 diez horas sin orden de detención si las autoridades tienen sospechas fundadas de que los sospechosos han cometido, o están por cometer, un delito o si no están en condiciones de determinar la identidad del sospechoso. Grupos de derechos humanos denunciaron que frecuentemente la policía mantuvo a sospechosos retenidos por más de 10 horas.

La ley otorga a la persona detenida el derecho de disponer de una decisión rápida sobre la legalidad de su detención mediante su comparecencia ante un juzgado de primera instancia en lo penal, que determina si se debe llevar a cabo una investigación. Hubo frecuentes demoras en este proceso y también para informar a los detenidos sobre los cargos en su contra.

La ley contempla el derecho a una fianza; excepto en casos relacionados con drogas, delitos violentos o violaciones a las leyes de tenencia de armas. Si bien se aplicó el sistema de fianza, los grupos de defensa de derechos civiles argumentaron que los jueces fueron más propensos a retener a los individuos procesados con prisión preventiva que a dejarlos en libertad con juicio pendiente.

Los detenidos pudieron acceder rápidamente al asesoramiento letrado y se designaron defensores públicos para los detenidos imposibilitados de pagar servicios de abogados, aunque el acceso a dicho asesoramiento legal se demoró a veces por sobrecarga del sistema. La fuerte demanda de servicios y escasez de recursos en la Defensoría Pública produjo una excesiva acumulación de causas a ser atendidas por los defensores oficiales. El CELS informó que aproximadamente 80 a 90 por ciento de los detenidos en la provincia de Buenos Aires solicitaron defensor oficial. Los detenidos tuvieron la posibilidad de reunirse con sus familiares aunque no siempre en forma rápida.

La ley prevé detenciones preventivas de hasta dos años para personas procesadas o sometidas a juicio y el plazo puede extenderse en situaciones específicas. El lento ritmo del sistema judicial frecuentemente tuvo como consecuencia detenciones que excedieron el período estipulado por ley. En el caso de los convictos, generalmente se reconoció el tiempo pasado en la cárcel.

e. Denegación de un Juicio Público Justo

La ley contempla el derecho a un juicio justo y el poder judicial generalmente aplicó este derecho. No obstante, existen denuncias de larga data con respecto a que algunos jueces provinciales y personal judicial fueron ineficientes y en ocasiones, objeto de manipulación política; en particular, en las provincias de Jujuy, Neuquén, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El sistema resultó afectado por demoras excesivas, obstrucciones procesales por acumulación excesiva de causas, cambios de jueces, asistencia administrativa inadecuada e ineficiencia general causada por los remanentes del sistema penal de indagatoria aplicado en los tribunales federales y numerosos tribunales provinciales. Los jueces cuentan con amplia discrecionalidad sobre la decisión de investigar un determinado caso y cómo hacerlo; algo que alimentó la percepción pública de que muchas de sus decisiones fueron arbitrarias. Las denuncias de corrupción en juzgados provinciales fueron más frecuentes que las relacionadas con juzgados federales; lo cual indica fuertes conexiones entre el poder ejecutivo y el judicial de las provincias.

El sistema judicial se divide en juzgados federales y juzgados provinciales, ambos encabezados por una Corte Suprema con Cámaras de Apelación y tribunales inferiores de primera instancia distritales. Los juzgados federales se dividen en juzgados económicos y penales.

Existe un sistema de tribunales militares con jurisdicción sobre el personal militar y en algunos casos puede imponer penas más severas por delitos y faltas de disciplina que las contempladas en el código penal de justicia civil.

- Procedimientos judiciales

Los juicios son públicos y los imputados tienen el derecho a asesoramiento legal y a proponer testigos para la defensa en los tribunales federales y en algunos provinciales que poseen un sistema de acusación penal. Si es necesario, se nombra un defensor público a cargo del Estado cuando los imputados enfrentan acusaciones graves por delitos penales. Durante la etapa probatoria, los imputados pueden remitir preguntas en forma escrita al juez de turno. Un panel de jueces se expide sobre culpabilidad o inocencia. Los juzgados provinciales y nacionales continuaron la transición hacia juicios orales en causas penales, reemplazando el viejo sistema de actuaciones escritas. Aunque la Constitución de 1994 introdujo el juicio por jurados, al término del año aún no se había aprobado la legislación regulatoria. En la provincia de Córdoba, a los imputados acusados de determinados delitos graves los asiste el derecho a un juicio por jurado. Las demoras en los juicios fueron un problema. Los imputados son

considerados inocentes y tienen el derecho a apelar al igual que los fiscales. Los menores de 16 años no pueden ser imputados penalmente. Los imputados y los abogados tienen permitido el acceso por ley a pruebas en poder del gobierno, si bien es probable que encuentren obstáculos o demoras para obtenerlas.

En febrero de 2006, el Congreso aprobó una ley que redujo el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 integrantes. Desde entonces, el poder ejecutivo presuntamente demoró el nombramiento de 200 jueces nacionales (que sólo tienen jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires) y de jueces federales; si bien las nominaciones ya habían sido examinadas públicamente y aprobadas por el Consejo de la Magistratura y el Ministro de Justicia. En consecuencia, los tribunales han designado en forma directa a los jueces en funciones, eludiendo de este modo el proceso de examinación pública. En mayo, la Corte Suprema declaró inconstitucional este proceso de designación de jueces en funciones y recomendó que el Congreso estableciera un proceso basado en la Constitución para nombrar jueces temporarios antes del mes de mayo de 2008.

- Presos y Detenidos políticos

No se informaron casos de presos o detenidos políticos.

- Procesos Judiciales Civiles y Recursos Legales

Hay un sistema judicial independiente e imparcial en materia civil y cualquier persona puede presentar demandas por daños y perjuicios o solicitar el amparo de derechos garantizados por la Constitución.

Organismos del gobierno, asociaciones de abogados, universidades y organizaciones no gubernamentales proveen asistencia legal gratuita y pueden representar a personas carentes de recursos ante los tribunales civiles, así como también asistirlos en procedimientos alternativos de resolución de conflictos.

f. Interferencia Arbitraria de la Privacidad, la Familia, el Hogar o la Correspondencia

La Constitución prohíbe estas acciones y el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones en la práctica.

Sección 2 – Respeto por las libertades civiles, que incluyen:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica.

Los individuos pueden criticar al gobierno pública o privadamente pero existen penas que incluyen sentencia de cárcel por calumnias e injurias y los funcionarios del gobierno han recurrido a recursos para implementarlas en contra de la oposición política y demás críticas. El gobierno presentó cargos por calumnias e injurias contra Elisa Carrió, líder del partido opositor Coalición Cívica, por haber acusado de corrupción a funcionarios en 2004. El tribunal desestimó una causa en su contra en agosto y la absolvió por otra en noviembre. Hacia fin de año, aún quedaban pendientes al menos dos causas civiles en su contra.

Los medios independientes fueron numerosos y activos y expresaron una amplia diversidad de opiniones sin restricciones. La totalidad de los medios de prensa son de propiedad privada, igual que un número significativo de radios y canales de televisión. El gobierno nacional es propietario de la agencia de noticias Télam, de una radio, un canal de televisión y posee el 20% de las acciones de Telesur, un servicio televisivo que cuenta con el apoyo del gobierno de Venezuela.

Algunos medios independientes, organizaciones no gubernamentales e internacionales adujeron que los departamentos del gobierno interfirieron con la libertad de prensa al distribuir la publicidad del gobierno en función de objetivos políticos partidarios. En Septiembre, la Corte Suprema emitió un fallo histórico que determinó que el retiro de la publicidad del gobierno de la provincia de Neuquén en represalia contra un periódico de gran circulación por su informe de corrupción provincial constituía censura no lícita e indirecta. El tribunal consideró que la provincia era libre para asignar sus recursos a su arbitrio pero que no debería hacer uso de la publicidad oficial como medio indirecto de cercenar la libertad de expresión. Si bien el tribunal ordenó al gobierno de Neuquén presentar un plan de distribución de la publicidad oficial en el término de 30 días, éste no había sido remitido al cabo del año. Un juicio similar contra el gobierno federal presentado en 2006 por la segunda empresa más importante de medios, Grupo Editorial Perfil, aún seguía pendiente hacia fin del año.

Numerosas radios de FM siguieron transmitiendo con licencias provisorias mientras queda pendiente terminar un proceso de normalización de licencias.

En septiembre, un tribunal provincial de Salta condenó al periodista Sergio Poma a un año de prisión en suspenso y lo inhabilitó para ejercer el periodismo durante un año por calumnias contra el gobernador de Salta. El Comité para la Protección de Periodistas sin Fronteras y organizaciones locales de periodistas criticaron la sentencia. Los abogados de Poma apelaron el fallo y la resolución seguía pendiente al término del año. Mientras tanto, Poma permanecía en libertad y en ejercicio de su profesión de periodista.

- Libertad en Internet

No hubo restricciones por parte del gobierno al acceso a Internet ni denuncias de que el gobierno monitoreara la correspondencia electrónica o los foros de Internet. Los individuos y los grupos pudieron expresar pacíficamente sus opiniones a través de Internet; inclusive del correo electrónico. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), más del 28 por ciento de la población tiene acceso a Internet.

- Libertad Académica y Eventos Culturales

No hubo restricción gubernamental para las actividades académicas o culturales.

b. Libertad de Asociación y Reunión Pacífica

La Constitución garantiza la libertad de reunión y asociación y generalmente, el gobierno ha respetado estos derechos en la práctica.

Oficiales de Gendarmería utilizaron la fuerza para sofocar huelgas en Santa Cruz, en marzo y mayo, con un resultado de 15 manifestantes heridos.

En diciembre, siete empleados del casino y un oficial de la Prefectura resultaron gravemente heridos cuando la Prefectura utilizó gas lacrimógeno y machetes para sofocar la huelga de trabajadores del casino de la Ciudad de Buenos Aires. El 17 de diciembre, la Presidenta desplazó de su cargo al Jefe de la Prefectura Carlos Fernández, en parte, por el accionar de la Prefectura durante la huelga.

c. Libertad de Culto

La Constitución garantiza la libertad de religión, y en términos generales, el gobierno la ha respetado en la práctica. Asimismo, la Constitución estipula que el gobierno federal “profesa la fe católica, apostólica y romana” y el gobierno le otorgó a la Iglesia Católica diversos subsidios que no reciben otros grupos religiosos. Otros cultos fueron practicados libremente.

Para realizar celebraciones religiosas públicas, obtener visas para misioneros extranjeros y exención impositiva, las organizaciones religiosas deben registrarse en la Secretaría de Culto dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e informar periódicamente para mantener su condición.

- Discriminación y Abusos Sociales

Continuaron los actos de discriminación y vandalismo contra minorías religiosas; particularmente, la comunidad judía. Se estima que la comunidad judía alcanzó aproximadamente 300.000 miembros. Hubo algunas denuncias de actos de antisemitismo, que incluyeron amenazas contra organizaciones y miembros de la comunidad judía.

En febrero, el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) recibió una queja relacionada con la definición de “judío” incluida en un diccionario para niños publicado por Clarín, un importante grupo de medios. Entre los términos utilizados en la definición se encontraban “miserable” y “usurero”. El INADI solicitó a Clarín retirar el diccionario de la venta. Clarín accedió al pedido y reconoció que la definición era “ofensiva” y en marzo sacó a la venta una edición revisada con la posibilidad de cambiar la versión anterior sin costo para los clientes.

Se registraron numerosos actos de vandalismo contra edificios de la comunidad judía y pintadas con contenido antisemita en todo el país. El 10 de enero, Adriana Dirson, una mujer judía, presentó una denuncia ante la policía de la ciudad de Rosario por actos de vandalismo contra el bar de su propiedad y un grupo de jóvenes de un club de rugby le envió un correo electrónico de tono amenazante. El 23 de enero, la policía interrogó a seis integrantes del club de rugby por su presunta participación en los incidentes.

El 21 de enero, se encontraron pintadas antisemitas en la sinagoga y en los accesos a la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El 13 de marzo, se encontraron pintadas antisemitas en casas y comercios; inclusive en la casa de un líder de la comunidad judía de General Roca, Río Negro.

En mayo, aparecieron pintadas antisemitas en una pared en el barrio de Once en donde predomina la comunidad judía, situado en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el comienzo de octubre hasta fin de año, aparecieron pintadas antisemitas en diversas ocasiones en la sinagoga de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

Se registraron incidentes en los cuales simpatizantes de fútbol provocaron e insultaron a los equipos y simpatizantes contrarios mediante cánticos antisemitas durante los partidos. El 22 de mayo, durante un evento deportivo de escuelas secundarias llevado a cabo en Tucumán, un grupo de aproximadamente 22 jóvenes profirió cánticos antisemitas contra los alumnos judíos que asistieron al evento. Los docentes presentes no hicieron nada para detener el incidente y los líderes de la comunidad judía hicieron la denuncia ante la policía de Tucumán.

En agosto, se desplazó de su cargo a un anestesista de un hospital público de Santa Fe por abierta discriminación contra los judíos.

Desde fines de septiembre, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) recibió 235 denuncias de actos antisemitas. Si bien la cantidad de correos electrónicos con contenido antisemita disminuyó durante el año, los correos con amenazas o contenido discriminatorio que la DAIA atribuyó a individuos más que a un grupo organizado seguían siendo motivo de preocupación.

INTERPOL libró seis de las nueve órdenes de detención requeridas por el país en contra de los sospechosos buscados por el ataque terrorista de 1994 al edificio de la Asociación Mutual Israelita-Argentina.

La causa de la DAIA contra los activistas del grupo de izquierda Quebracho quienes impidieron que grupos de la comunidad judía se manifestaran frente a la Embajada de Irán en agosto de 2006 seguía pendiente de resolución al cabo del año.

En abril, el Presidente Kirchner se dirigió a la comunidad judía durante una ceremonia en memoria del aniversario número sesenta y cuatro del levantamiento del Ghetto de Varsovia, en el cual rindió homenaje a los muertos en el Holocausto. El gobierno continuó apoyando el diálogo público para poner en evidencia la discriminación durante el pasado y alentar mayor tolerancia religiosa.

Para información más detallada, consultar el *Informe Internacional 2007 sobre Libertad de Culto*.

d. Libertad de Circular por el País, Personas Desplazadas dentro del País, Protección de Refugiados y Personas sin Ciudadanía o Nacionalidad

La Constitución garantiza el derecho de circular libremente por el país, viajar al exterior, emigrar y el derecho de repatriación. El gobierno respeta generalmente estos derechos en la práctica.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias que brindan protección y asistencia a los refugiados, personas que buscan asilo y otras personas en situación delicada.

La ley prohíbe el exilio forzoso, y el gobierno no exilió a nadie.

- Protección de refugiados

La Ley contempla el otorgamiento de asilo o estatus de refugiado en concordancia con la Convención de Naciones Unidas de 1951 en torno a la Condición de Refugiado y su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a refugiados. El gobierno otorgó estatus de refugiado o asilo.

En la práctica, el gobierno brindó protección contra el temor de devolución forzada, el regreso de personas al país en el que temen ser perseguidos. El gobierno brindó estatus de refugiado y protección temporaria por razones humanitarias de acuerdo con las normas establecidas por la ley internacional.

Asimismo, la ley faculta al gobierno para brindar protección temporaria por cuestiones humanitarias como por ejemplo, la reunión familiar, a individuos que pueden no calificar como refugiados según la convención de 1951 y el protocolo de 1967.

Según el Comité de Elegibilidad para Refugiados del gobierno, comité interministerial a cargo de la evaluación de pedidos de refugio y asilo, el gobierno aceptó refugiados para su relocalización y otorgó condición de refugiados a 51 personas al término del año.

El gobierno continuó cooperando con la Oficina del ACNUR para relocalizar familias colombianas en riesgo. Según el ACNUR, el país relocalizó a 57 colombianos durante el año.

Sección 3 – Respeto de los Derechos Políticos – El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La ley garantiza el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno de forma pacífica, y los ciudadanos ejercitan ese derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal.

- Elecciones y participación política

En octubre se realizaron elecciones legislativas nacionales y presidenciales. En el nivel nacional, se votó la renovación de la mitad de las bancas en la Cámara de Diputados y un tercio de las bancas del Senado. Los medios, el Ministro de Justicia y diversas ONG observaron las elecciones y estimaron que fueron libres y limpias; si bien diversos partidos de oposición iniciaron acciones y adujeron que las boletas de las listas opositoras no estaban disponibles en los lugares de votación de algunas provincias.

También hubo elecciones provinciales durante el año en 22 de las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cumplimiento de la Reforma del Código Electoral y un decreto presidencial de 2006, pudieron votar más de 25.000 detenidos en cárceles federales a la espera de un juicio. El CELS monitoreó la votación en las cárceles federales.

Los partidos políticos operaron generalmente sin restricciones.

Los decretos estipulan que un tercio de los miembros de ambas Cámaras deben pertenecer al sexo femenino, un objetivo logrado mediante listas electorales parejas en cuanto al número de candidatos de ambos sexos. Se eligieron 25 mujeres en el Senado de 72 bancas y 82 mujeres en la Cámara de Diputados que posee 257 bancas. El Presidente, dos de los siete ministros de la Corte Suprema y tres ministros del gabinete son del sexo femenino.

Un miembro de la comunidad indígena fue elegido como diputado nacional durante el año. No se conocieron otras minorías étnicas o raciales en el Congreso Nacional. No se conocieron otras minorías indígenas, étnicas o raciales en el Gabinete ni en la Corte Suprema.

- Corrupción Gubernamental y Transparencia

La legislación prevé penas para los casos de corrupción oficial; no obstante, el gobierno no implementó las leyes en forma efectiva y se registraron frecuentes informes periodísticos sobre funcionarios del poder ejecutivo involucrados en prácticas de corrupción.

La corrupción del gobierno constituyó un grave problema según los indicadores de gobernabilidad mundial del Banco Mundial. Las instituciones históricamente débiles y un sistema judicial frecuentemente ineficiente y politizado dificultó la erradicación de la corrupción sistémica de cualquier orden.

Los funcionarios públicos deben cumplir con las leyes de divulgación de información patrimonial y la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia (OA) es responsable de analizar e investigar a los funcionarios del poder ejecutivo nacional según sus declaraciones juradas. Asimismo, la AO es responsable de las investigaciones de corrupción en el poder ejecutivo nacional o en cuestiones relacionadas con fondos federales, excepto en el caso de fondos transferidos a las provincias. Si bien, la AO es por definición, parte del poder judicial, no está facultada para tratar causas en forma independiente pero puede remitir los casos a otros organismos o actuar como querellante y requerir un juez para

iniciar las acciones. La mayoría de los casos de corrupción de alto perfil son investigados por un juez en particular.

Según el Centro para el Estudio y la Prevención de Delitos Económicos, una ONG local, la resolución de los casos de corrupción lleva 14 años como promedio y tan sólo 15 de los últimos 750 casos investigados han terminado con una condena. La Oficina Anticorrupción del gobierno continúa trabajando por medidas contra la corrupción. El centro calculó que la corrupción le ha costado al país 10 mil millones de dólares (30 mil doscientos millones de pesos) desde 1980 y estimó que aproximadamente el 20 por ciento de los casos de corrupción prescribieron. Además, la prensa informó que permanecían vacantes seis de las ocho magistraturas del tribunal penal que entiende en el 20 por ciento de las causas por corrupción pendientes.

En mayo, el gobierno desplazó de sus cargos a dos funcionarios, Fulvio Madero, Presidente de la autoridad regulatoria de gas natural a nivel nacional y Nestór Ulloa, gerente de Nación Fideicomisos creado para administrar el financiamiento privado para diversos proyectos de obras públicas; presuntamente por haber aceptado sobornos de la empresa constructora sueca Skanska, que había firmado contrato con el gobierno para extender un gasoducto. Al término del año, la causa proseguía su curso.

En junio, un escuadrón de desactivación de explosivos descubrió una bolsa con 100.000 pesos y 30.000 dólares estadounidenses en el baño de la Ministra de Economía Felisa Miceli, quien renunciara posteriormente debido al incidente. Miceli fue detenida y puesta en libertad bajo fianza. En diciembre, durante una audiencia de comparecencia, se la acusó formalmente de encubrir el escándalo y de sustracción de documento público. La causa seguía pendiente al cabo del año.

En agosto, se le pidió la renuncia a Claudio Uberti, titular del Órgano de Control de Concesiones Viales del gobierno, debido al intento fallido de un ciudadano extranjero procedente de Venezuela de introducir ilegalmente en el país cerca de 800.000 dólares estadounidenses. La investigación del gobierno proseguía hacia fines de año.

Un estudio que la OA terminó a fin de año reveló que aproximadamente el 75 por ciento de las compras del gobierno entre 2002 y 2005 se efectuaron mediante contratación directa, frecuentemente con un solo proveedor y no mediante licitaciones públicas. El informe de la OA manifestó preocupación en cuanto a que el proceso puede facilitar la corrupción. Según el informe, algunos funcionarios del gobierno defendieron esta práctica, aduciendo que a veces sólo un proveedor cumplía con las especificaciones del contrato y destacaron que muchos contratos estaban por debajo del límite legal para licitaciones públicas. No obstante, el informe de la OA detalló que los funcionarios utilizaron diversos

métodos para eludir los procesos destinados a impedir que haya un único proveedor para los contratos.

Un decreto presidencial permite el acceso público a información del gobierno a través de los órganos gubernamentales, los cuales deben contestar los pedidos de información pública en el plazo de 10 días hábiles, con una prórroga de 10 días. No obstante, la capacidad de respuesta a estos pedidos varió entre los órganos del Ejecutivo. La ONG Poder Ciudadano estimó que los órganos del Ejecutivo responden a dichos pedidos dentro del plazo requerido, aproximadamente en el 70 por ciento de los casos. La ONG destacó que los pedidos políticamente sensibles como los costos operativos de la Presidencia, con frecuencia fueron demorados o quedaron sin respuesta.

Sección 4 – Actitud del Gobierno en torno a la Investigación Internacional y No Gubernamental sobre Presuntas Violaciones de los Derechos Humanos

Una amplia gama de organismos de derechos humanos locales e internacionales funcionaron generalmente sin restricción por parte del gobierno, investigando y publicando el resultado de sus investigaciones sobre casos de abusos de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno generalmente mostraron cooperación y fueron receptivos a los puntos de vista de estos grupos.

Según Amnistía Internacional, Pablo Salinas, un defensor de los derechos de los prisioneros, recibió amenazas anónimas de muerte en abril, en relación con sus esfuerzos por poner en evidencia la brutalidad policial y el maltrato en las cárceles de Mendoza. A fin de año, no había información disponible sobre el estado de la causa.

Sección 5 – Discriminación, Abusos Sociales y Trata de personas

La ley prohíbe la discriminación por cuestiones de raza, género, discapacidad, idioma o posición social, y el gobierno generalmente hizo cumplir estos derechos en la práctica.

En noviembre, el INADI publicó los resultados de una encuesta nacional que reveló que tres de cada 10 ciudadanos habían sufrido discriminación y cinco de 10, había presenciado un acto de discriminación. Los encuestados indicaron que las minorías sexuales, las personas con incapacidades, las minorías raciales y los ciudadanos de otros países se encontraban entre los grupos más afectados por la discriminación.

Mujeres

La ley penaliza la violación; incluso la violación del esposo, pero la necesidad de presentar pruebas, ya sea en forma de herida física evidente o testimonio de testigo, a menudo planteó problemas. Las penas por violación alcanzan hasta 20 años de prisión. De acuerdo con las estadísticas preliminares de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (UFI-INTSEX), la unidad recibió 91 denuncias por violación durante los primeros ocho meses del año. El 80 por ciento de las víctimas de violación que presentaron estas denuncias eran adultos y el 20 por ciento eran menores. Entre enero y abril, la Unidad Judicial de Mujeres y Menores de la ciudad de Córdoba recibió 295 denuncias de delitos contra la integridad sexual que incluyeron abuso sexual y violación. No se informaron casos de renuencia policial o judicial a actuar en casos de violación; no obstante, defensores de los derechos de la mujer adujeron que las actitudes de la policía, los hospitales y los tribunales hacia las víctimas de violencia sexual frecuentemente revictimizan a la persona. Según estadísticas preliminares de UFI-INTSEX, sólo 10 por ciento de las denuncias de delitos contra la integridad sexual tuvieron condena.

La ley prohíbe la violencia doméstica, incluso el abuso marital aunque la legislación define la violencia contra la mujer como un delito leve y las acciones se inician en mayor medida, en los tribunales civiles más que en los penales. Los tribunales de familia están facultados para excluir al responsable de un acto de violencia del hogar o el lugar de trabajo de la víctima. No obstante, la ley sólo contempla penas para casos de violencia doméstica cuando involucra delitos contra la integridad sexual; en cuyo caso la pena puede alcanzar un término de 20 años de cárcel. No obstante, la falta de control por parte de la policía y del sistema judicial conllevó con frecuencia la falta de protección de las víctimas.

La violencia doméstica contra las mujeres ha constituido un problema serio. Según informes periodísticos que citan estadísticas oficiales, durante la primera mitad del año, las Comisarías de la Mujer distribuidas en la provincia de Buenos Aires recibieron 18.000 demandas por violencia doméstica, 5.000 de las cuales denunciaban lesiones.

El programa del Ministerio del Interior lanzado en marzo de 2006 que creó unidades móviles de asistencia a las víctimas de violencia sexual y doméstica sólo se implementó en la ciudad de Buenos Aires. Entre marzo y octubre, las unidades móviles brindaron asistencia y asesoramiento legal a 453 víctimas de violencia doméstica. La ciudad de Buenos Aires brindó un servicio telefónico gratuito que ofrecía asesoramiento y recibía quejas.

A principios de diciembre, la Corte Suprema de Buenos Aires ordenó a los tribunales penales, de familia y menores de la provincia así como a los tribunales provinciales en materia civil y de familia, designar funcionarios de turno para la recepción de demandas por hechos de violencia doméstica y asistir a las víctimas fuera del horario regular de atención de los tribunales.

Las instituciones privadas y públicas ofrecieron programas de prevención y suministraron apoyo y tratamiento a mujeres abusadas pero hubo pocos casos de alojamiento en lugares de transición. El gobierno municipal de Buenos Aires puso en funcionamiento un refugio pequeño para mujeres golpeadas; sin embargo, hubo muy pocos refugios.

La ley no prohíbe el acto de prostitución por parte de un individuo pero la promoción, facilitación o explotación de las personas en la prostitución es ilegal, pero ha ocurrido. Las ONG consideraron el turismo sexual como un problema pero no poseían estadísticas de su alcance. El tráfico de mujeres hacia o dentro del país para su prostitución representó un problema.

Se prohíbe el acoso sexual en el sector público de conformidad con la legislación que impone medidas disciplinarias o correctivas. En algunas jurisdicciones como por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el acoso sexual puede ocasionar el despido del acosador, mientras que en otras provincias como la de Santa Fe, la sanción máxima consiste en cinco días de prisión. La Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral perteneciente al Ministerio de Trabajo recibió 40 quejas informales de acoso sexual en el lugar de trabajo durante el año. No había estadísticas disponibles sobre la aplicación de penas por parte del gobierno por casos de acoso sexual.

Si bien las mujeres gozaron de igualdad ante la ley, incluso de derechos de propiedad, sufrieron discriminación económica y la cantidad de puestos de trabajos por menor salario ocupados por mujeres fue desproporcionadamente alto. Según un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, en la zona del Gran Buenos Aires, los hombres ganaron 5% más que las mujeres por un trabajo de tiempo completo equivalente y 21 % más que las mujeres por un trabajo de tiempo parcial equivalente; un desequilibrio explícitamente prohibido por ley. Según la Comisión Tripartita, las mujeres ganaron, en promedio, 29% menos que los hombres. Aproximadamente 70% de las mujeres empleadas fuera del hogar desempeñaron tareas en puestos de trabajo no calificados aunque más mujeres que hombres tenían títulos universitarios. La ley prevé hasta tres años de prisión por discriminación basada en el género. Un estudio de la OIT realizado en diciembre informó que de las 756.000 personas entre 15 y 24 años de edad que no han estudiado ni trabajado nunca, el 77 por ciento estaba compuesto por mujeres jóvenes que habían abandonado sus estudios secundarios.

El Consejo Nacional de Mujeres llevó adelante programas para promover la igualdad de oportunidades sociales, políticas y económicas de las mujeres. El consejo trabajó con el representante especial para asuntos internacionales de la mujer, el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales y empresariales, para formar la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral para fomentar la igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral. En enero, la comisión creó la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral que brindó asistencia en 320 casos durante el año. La violencia laboral se define como la violencia de género, presión laboral tendenciosa o “mobbing”, o abuso psicológico, moral o sexual en el lugar de trabajo.

- Menores

Si bien el gobierno expresó un fuerte compromiso con los derechos y el bienestar de los menores, muchos programas continúan recibiendo escaso financiamiento.

La ley dispone la educación libre y obligatoria hasta los 13 años, comenzando a los cinco. Según un estudio del Banco Mundial del año 2005, de cada 100 alumnos que ingresan a la escuela primaria, 84 pasan a séptimo grado y 40 ingresan al último año de la secundaria. Los índices más bajos de asistencia escolar se registraron entre menores de familias de pocos recursos. La tasa de inscripción escolar de las mujeres fue levemente superior a la de los varones.

Un estudio del Ministerio de Educación mostró una disminución del 15 por ciento en la cantidad de estudiantes que se graduaron de la secundaria (301.073 graduados en 2002 vs. 255.196 en 2006). La provincia de Buenos Aires registró la mayor disminución en la cantidad de graduados durante dicho período que alcanzó el 30 por ciento. El informe atribuyó la caída a la falta de perspectivas laborales para graduados de escuelas secundarias y a que los estudiantes prefieren los programas de extensión educativa para adultos que brindan alternativas flexibles que permiten combinar trabajo y estudio.

Existían numerosos programas de salud a nivel nacional y provincial disponibles tanto para varones como para mujeres.

El abuso de menores siguió ocurriendo y no fue poco común; por ejemplo, según informes periodísticos que consignan estadísticas oficiales, durante la primera mitad del año, las Comisarías de la Mujer de la provincia de Buenos Aires registraron 1.000 casos de lesiones a menores. El gobierno tomó medidas para combatir el abuso de menores. El Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y

Familia continuó con sus campañas de concientización pública y habilitó una línea de ayuda en todo el país a la que los menores podían llamar para recibir asesoramiento, efectuar reclamos y denunciar hechos de abuso u otra clase de violaciones de sus derechos. Fiscales y agentes policiales investigaron casos de pornografía infantil en Internet. La prensa y las ONG informaron que hubo menores involucrados en casos de explotación sexual, turismo sexual y narcotráfico pero no existieron estadísticas confiables para determinar el grado de dicha explotación.

La internación de niños en institutos de menores debido a las circunstancias sociales fue un problema.

- Trata de Personas

La legislación penaliza los delitos a menudo asociados con la trata pero no existe una ley abarcadora que penalice la trata en sí mismo. El país fue fuente, lugar de tránsito y destino de personas víctimas de la trata. La trata de personas involucró fundamentalmente ciudadanos que son traficados dentro del país con fines de explotación sexual y laboral. Estas personas fueron traficadas mayoritariamente desde las provincias del norte hacia las centrales y a Buenos Aires y desde Buenos Aires a diversas provincias del sur. En menor medida, el país fue destino de víctimas, principalmente mujeres y menores provenientes de Paraguay, República Dominicana, Colombia, Bolivia y Brasil. Según la prensa, la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de Delito (OFAVI) intervino en 85 casos de trata de personas durante el año. La OFAVI informó que la mayor conciencia del problema por parte del público y las mejoras en la capacitación de jueces y fiscales produjo un aumento en la cantidad de denuncias de trata recibidas por la oficina.

Si bien no existieron informes oficiales sobre las actividades de los traficantes, los medios informaron que éstos a menudo se presentaban como miembros de agencias de empleo e incluso como empleadores particulares. Asimismo, fuentes confiables identificaron grandes redes de crimen organizado compuestas ocasionalmente por familiares consanguíneos y sus socios en los negocios que incluyen reclutadores y gerenciadore de burdeles. Los traficantes confiscaban documentación de viaje para impedir que las víctimas recurrieran a las autoridades para obtener protección. Las víctimas, en especial mujeres y adolescentes prostitutas, eran privadas periódicamente de contacto con el mundo exterior y a menudo se las amenazaba o castigaba.

El país no posee legislación específica sobre la trata de personas. Los traficantes son procesados en virtud del Código Penal y la Ley de Inmigración de 2005 por cargos de prostitución basados en fraude, intimidación o coerción o, en el caso de menores, contrabando de extranjeros, esclavitud por contrato u otros

abusos similares. Las penas por trata de personas oscilaron entre 1 y 20 años de prisión, según la naturaleza del delito y la edad de la víctima. En ausencia de legislación anti-trata, los funcionarios no pudieron brindar información precisa sobre las investigaciones y procesos contra traficantes.

Las iniciativas relacionadas con la detección del tráfico y el procesamiento vinculado con la trata continuaron aunque con éxito limitado. La OFAVI, oficina dependiente de la Procuraduría General de la Nación, es el organismo a cargo de la coordinación de iniciativas anti-trata con los órganos de aplicación de la ley. Si bien los funcionarios dedicados a la ejecución de la ley carecen de un mandato claro proveniente de los líderes políticos y de recursos suficientes para perseguir activamente a los traficantes locales e internacionales, las investigaciones y las detenciones aumentaron. Durante el año, no hubo estadísticas disponibles sobre la cantidad de procesamientos y condenas relacionados con la trata.

No hubo denuncias de participación de autoridades federales en la trata de personas. No obstante, hubo denuncias de corrupción generalizada y connivencia con traficantes a nivel provincial y local que impidieron los procesamientos. Existieron algunos esfuerzos por investigar y procesar a funcionarios oficiales y de la policía local bajo sospecha de participación en la trata de personas. Por ejemplo, en abril, el cabo Gabriel Eduardo Jalil, ex oficial de la policía de la provincia de Córdoba, fue sentenciado a cuatro años de cárcel y Roberto Serniotti y Alejandra Suárez recibieron sentencias respectivas de tres años y medio de prisión cada uno, por su participación en un caso de trata de menores. Otros dos cómplices recibieron penas menores con libertad condicional.

A fin de año, los fiscales continuaban investigando la participación de la policía y de funcionarios locales en un caso en el que 37 mujeres fueron forzadas a ejercer la prostitución en la provincia de Chubut. En noviembre de 2006 fueron acusados dos propietarios de burdeles, dos ex oficiales de la policía y cuatro ex funcionarios públicos. Sólo los dos propietarios de burdeles permanecían con prisión preventiva al término del año.

Las víctimas de trata de personas generalmente no fueron detenidas, puestas en prisión, ni deportadas; si bien los detenidos por delitos relacionados con la prostitución fueron confinados en algunos casos (por ejemplo, si las víctimas de trata actuaron luego como abusadores) o deportados (principalmente cuando los casos eran llevados por fiscales o jueces con escasa experiencia o capacitación en temas de trata.)

La OFAVI coordinó la política de asistencia a la víctima y ofreció a un número limitado de ellas acceso a tratamiento médico y psicológico, asesoramiento legal, ser referidas a otras fuentes de asistencia y repatriación. El gobierno no mantuvo lugares de ayuda para las víctimas de la trata pero las oficinas de

asistencia a las víctimas trabajaron conjuntamente con organismos de servicios sociales para asegurar que las víctimas de la trata recibieran refugio y atención apropiada. Algunas víctimas calificaron para recibir asistencia del gobierno nacional pero la mayoría de los funcionarios provinciales no estaban capacitados específicamente para identificar o ayudar a las víctimas de la trata. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) colaboró en la repatriación y reinserción de las víctimas extranjeras de la trata.

En julio, el Ministro de Justicia lanzó un programa nacional para impedir la trata de personas y brindar asistencia a las víctimas. En octubre, el Programa Nacional para Prevenir, Erradicar y Asistir a las Víctimas de la Trata de Personas encabezado por el Ministro del Interior fue implementado por decreto presidencial.

- Personas con Discapacidades

La Constitución y las leyes prohíben la discriminación contra personas con discapacidades físicas o mentales, ya sea en el trabajo, la educación, el acceso al cuidado de la salud o la provisión de otros servicios públicos, pero el gobierno no logró que estas leyes fueran implementadas efectivamente. Asimismo, una ley específica dispone que los edificios posean acceso para personas discapacitadas; no obstante, el gobierno no la implementó en forma efectiva.

Tampoco se implementaron acabadamente las leyes que disponen mejorar las condiciones de acceso a colectivos y trenes para personas con discapacidades.

El gobierno hizo respetar el derecho de las personas con discapacidades a votar o participar en asuntos de orden cívico. El Senado Nacional emplea a personas con síndrome de Down como porteros del Congreso.

La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidades, del Consejo Nacional para la Coordinación de Políticas Sociales, posee la responsabilidad formal de gestionar la ubicación de personas con discapacidades.

En septiembre, el gobierno aprobó una ley que exime de pago de derechos de autor a la reproducción y distribución de trabajos científicos y literarios en formatos especiales para los ciegos y otras personas con discapacidad.

- Comunidades Indígenas

La Constitución reconoce la identidad étnica y cultural de los indígenas y establece que el Congreso debe proteger el derecho a la educación bilingüe, al reconocimiento de sus comunidades y de la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales y autorizar a que participen en la administración de sus recursos naturales. En la práctica, los indígenas no participaron plenamente en la administración de sus tierras o recursos naturales; en parte, porque la responsabilidad por la implementación de las leyes está delegada en las 23 provincias, de las cuales sólo 11 poseen constituciones que reconocen los derechos de los indígenas.

Se estima que la población indígena oscila entre 700.000 a 1.500.000 personas. Los índices de pobreza superaron el promedio en áreas con grandes poblaciones indígenas. Los índices de analfabetismo, enfermedades crónicas y desempleo son mayores entre la población indígena. La falta de profesores capacitados dificultó las iniciativas gubernamentales para ofrecer oportunidades de educación bilingüe a indígenas. Según una encuesta del 2004/05, el 33 por ciento de la población Mbya Guaraní de Misiones y casi el 20 por ciento de la población Wichi mayor de 15 años que habita en Chaco, Formosa y Salta nunca asistieron a la escuela ni recibieron educación formal.

Las inundaciones ocurridas en enero en las provincias de Salta y Chaco afectaron desproporcionadamente a las comunidades indígenas; 19 miembros de la comunidad Toba murieron de desnutrición hacia fines de octubre. Varias comunidades indígenas denunciaron que ninguno de los gobiernos provinciales les ofreció evacuar a las víctimas de las inundaciones de origen indígena ni les proveyeron asistencia adecuada después del desastre. La Corte Suprema ordenó en septiembre al gobierno nacional y al de la provincia del Chaco que abastecieran de agua potable, alimentos, medios de comunicación y transporte a las comunidades indígenas de General Güemes y General San Martín. En noviembre, funcionarios nacionales y provinciales informaron a la Suprema Corte sobre sus esfuerzos de asistencia y un sólo funcionario nacional mencionó que tan sólo en el mes de octubre se registraron en la zona afectada 254 casos de desnutrición, 91 casos de presunta tuberculosis, 36 casos confirmados de tuberculosis y 85 embarazos en riesgo.

En 2006, un tribunal de la provincia de Jujuy hizo lugar a un reclamo por parte de la Comisión para la Participación Indígena y ordenó al gobierno provincial restituir tierras a las comunidades indígenas para el mes de noviembre. Según los representantes de la comisión, sólo el 50 por ciento del territorio en disputa en Jujuy había sido restituido a las comunidades indígenas al término del año.

En octubre, los medios locales informaron que 397 demandas relacionadas con tierras indígenas en 12 provincias, que involucraban aproximadamente 21.400.000 acres, no habían sido resueltas.

Las negociaciones por un reclamo de tierras en territorio de Misiones entre la comunidad Mbya Guaraní y la Universidad Nacional de La Plata continuaban.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seguía evaluando un reclamo presentado por la asociación indígena Lhaka Honhat con respecto a la falta de implementación por parte del gobierno nacional de una política de títulos que les restituyera sus tierras ancestrales.

- Otros Abusos Sociales y Discriminación

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) recibió 1.600 denuncias de discriminación durante el año; incluso quejas por rescisión ilegal del contrato de trabajo por cuestiones de orientación sexual, identidad de género o condición de VIH positivo. La ley prohíbe el despido de personas VIH positivas. En diciembre, la CHA denunció que un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires violó, golpeó y torturó a un travesti. A fin de año, no había indicios de que se hubieran presentado acusaciones o iniciado una investigación.

El 2 de noviembre, la policía detuvo a Rodolfo Aguilares en relación con el asesinato de la activista transexual Pelusa Liendro en noviembre de 2006, quien fuera encontrada apuñalada en su auto 10 días después de que los medios revelaran una cámara oculta que ella y otras activistas habían filmado sobre el acoso y abuso policial de personas transexuales en la provincia de Salta. Aguilares, un amigo de la víctima, permanecía detenido al término del año.

Capítulo 6 – Derechos de los Trabajadores

a. Derecho de Asociación

La ley reconoce a todos los trabajadores, con excepción del personal militar, el derecho a formar y asociarse en "sindicatos de trabajo libres y democráticos, reconocidos por simple inscripción en un registro especial" y los trabajadores ejercieron este derecho. Aproximadamente 35-40% de la fuerza laboral estaba organizada.

La Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y otros grupos no afiliados en la Confederación General del Trabajo argumentaron que la cláusula de la Ley de Asociaciones Profesionales para el reconocimiento legal de solamente un sindicato por sector entra en conflicto con la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo e impide que la CTA obtenga personería jurídica plena. A fin de año, la CIDH seguía revisando el reclamo de la CTA que data del 2004.

b. Derecho de organización y negociación colectiva

La ley establece que los sindicatos tienen derecho a negociar convenios colectivos de trabajo y a contar con los recursos de conciliación y mediación. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ratifica convenios colectivos de trabajo que cubran aproximadamente 75% de la fuerza laboral con empleo formal. Según la Organización Internacional del Trabajo, el proceso de ratificación obstruyó las negociaciones colectivas libres, porque el ministerio no sólo evaluó si un acuerdo laboral colectivo incluía cláusulas que violaban las normas de orden público sino que también evaluó si el acuerdo cumplía con criterios de productividad, inversión, tecnología y capacitación vocacional. No obstante, durante el año no se conocieron casos de negativa del Gobierno a aprobar algún acuerdo colectivo conforme con dichos criterios.

Los sindicatos poseen el derecho de huelga si bien aquéllos que representan empleados públicos y trabajadores que prestan servicios esenciales están sujetos a la condición de que se presten los "servicios mínimos" (no definidos). En algunos casos, "los servicios mínimos" han sido incorporados en los acuerdos de negociación colectiva pero como la ley no define el concepto de "servicios mínimos", los empleados públicos y los trabajadores que prestan servicios esenciales poseen el derecho de iniciar una huelga sólo después de haber cumplido un proceso obligatorio de conciliación de 15 días. Una vez vencido dicho plazo, los empleados públicos y los trabajadores mencionados deben notificar su intención de huelga a la autoridad administrativa y a la oficina pública de la cual dependen con cinco días de anticipación. Posteriormente, todas las partes negocian cuáles serán los servicios mínimos que seguirán brindándose y se determina un cronograma respectivo. A su vez, se requiere que la oficina pública informe a los usuarios con dos días de anticipación sobre la intención de huelga. Otros trabajadores ejercieron este derecho de huelga mediante huelgas legales.

No existen leyes especiales o excepciones a la legislación laboral en vigencia en las tres zonas de procesamiento de exportaciones en funcionamiento.

c. Prohibición de Trabajo Forzado u Obligatorio

Si bien la ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluso el realizado por menores, se informaron casos de dichas prácticas. Durante el año, se procesó a una persona como resultado de una investigación iniciada en 2006 sobre un presunto caso de trabajo forzado que involucraba a cientos de ciudadanos bolivianos que trabajaban en fábricas clandestinas ubicadas en la zona sur del barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires.

d. Prohibición de Trabajo de Menores y Edad Mínima para el Empleo

La ley protege a los menores de la explotación en el lugar de trabajo. En 2004, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) estimó que hasta 1.500.000 niños o 22% de los menores de 15 años, realizaron algún tipo de trabajo — porcentaje considerado aún dentro de los límites aceptables.

La ley establece una edad mínima de 14 años para contraer empleo. En casos excepcionales, el Ministerio de Educación puede autorizar que un niño menor de esa edad trabaje como parte de una unidad familiar. Los menores entre 14 y 18 años pueden trabajar en un número limitado de categorías laborales y en horarios restringidos, siempre que hayan completado su educación obligatoria, la cual normalmente culmina a los 18 años. Las sanciones penales por emplear trabajadores menores de esa edad varían de 350 a 1.750 dólares (1.000-5.000 pesos) por cada menor empleado. Los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires son responsables por la puesta en vigor de la legislación laboral.

La mayor parte del trabajo infantil ilegal ocurre en el sector informal, donde los inspectores poseen facultades limitadas para hacer cumplir la ley. El trabajo infantil en áreas urbanas incluyó trabajos tales como la fabricación de ropa en escala reducida, reciclado de basura, ventas callejeras, servicio doméstico, y preparación de comidas. En junio de 2006, la CONAETI aprobó una nueva lista de trabajos riesgosos para menores y presentó un proyecto de ley en el Congreso para elevar la edad en que los menores pueden realizarlos. La lista estaba pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Trabajo hacia fin de año. Los menores también fueron involucrados en prostitución, turismo sexual y tráfico de estupefacientes.

En junio, la CONAETI conjuntamente con el Programa de Desarrollo de la ONU, la OIT y UNICEF lanzaron un plan nacional para la erradicación y prevención del trabajo infantil, cuyo propósito consistió en fortalecer a la familia, prevenir la deserción escolar y brindar asistencia psicológica y sanitaria a los menores. En octubre, la CONAETI, la OIT, la OIM, UNICEF y Fundación Telefónica organizaron un seminario para prevenir y eliminar el trabajo infantil en el negocio del reciclaje y aumentaron la conciencia pública sobre esta cuestión. Asimismo, estas organizaciones conformaron grupos de trabajo para desarrollar recomendaciones sobre políticas tendientes a eliminar el trabajo infantil en la industria del reciclaje.

El gobierno también trabajó con la OIM, la organización "Save the Children" de Suecia, el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos y con autoridades provinciales en la zona de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay en relación con la explotación sexual infantil. El esfuerzo se concentró en la educación como medio de prevención; principalmente mediante la distribución de materiales de enseñanza en las escuelas. Se realizó una campaña conjunta de concientización a través de anuncios en televisión y radio, un documental, folletos impresos y vía pública en castellano, portugués y en el idioma indígena guaraní para brindar información básica sobre cómo se captura a las víctimas, medidas de seguridad para prevenir la situación e información de contacto para asistencia a la víctima. La campaña también estableció una red trinacional de funcionarios del gobierno local y organizaciones civiles para ayudar a coordinar los esfuerzos en contra de la trata de personas.

e. Condiciones Laborales Aceptables

El salario mínimo mensual se estipuló en aproximadamente 283 dólares estadounidenses (980 pesos), 11% menos que el monto estimado de 318 dólares estadounidenses (1.000 pesos) requeridos por una familia de cuatro integrantes para mantener un nivel de vida "decente". La mayoría de los trabajadores del sector formal ganan significativamente más que el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo es responsable por el cumplimiento efectivo de la legislación que rige las condiciones laborales. El Ministerio de Trabajo aumentó las inspecciones destinadas a formalizar la fuerza laboral, el INDEC informó que en septiembre el trabajo informal disminuyó con respecto al año anterior del 44,1% al 40,4%. Según un estudio de la OIT realizado en diciembre, el 60 por ciento de los ciudadanos con empleo entre 15 y 24 años de edad tenían trabajos informales.

La legislación nacional en materia laboral establece normas en las áreas de salud, seguridad y franjas horarias. La máxima carga horaria de trabajo por día es de ocho horas y la máxima carga semanal es de 48 horas. Se requiere pago de horas extra por horas trabajadas fuera de estos límites. La legislación

establece períodos mínimos de descanso y requiere por lo menos 12 horas de descanso para iniciar un nuevo día de trabajo. Los domingos son feriados y las personas que deban trabajar en domingo deberán recibir doble pago. Sin embargo, las leyes que rigen las condiciones aceptables de trabajo no se hacen cumplir en todos los casos; especialmente en el caso de los trabajadores del sector informal.

La ley estipula que los empleadores deben asegurar a sus empleados contra accidentes en el lugar de trabajo y en el trayecto desde y hacia el mismo. Los trabajadores tienen el derecho de retirarse de situaciones laborales peligrosas o insalubres sin riesgo de perder su continuidad laboral. De todos modos, los trabajadores que abandonan el lugar de trabajo antes de que se pruebe que no cumple con las condiciones de seguridad se arriesgan a perder su trabajo. En esos casos, el trabajador tiene derecho a apelar judicialmente aunque el proceso puede ser muy prolongado.